diciembre de 2006, cuando se reunió el día 29 de diciembre de 2006. A efectos de información pública y de presentación de reclamaciones y sugerencias respecto de Ordenanza Reguladora de la Instalación de Andamios o Instalaciones Similares y Vallas en la Vía Pública, se computa el citado plazo de información desde el anuncio publicado en el BOC número 15, de fecha 22 de enero de 2007.

Santander, 24 de enero de 2007.—El gerente de Comercio y Mercados, David Alameda Recio.
07/1028

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Notificación de incoación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Por este Ayuntamiento de mi Presidencia se tramita expediente de baja de oficio del Padrón municipal con relación a las siguientes inscripciones padronales:

DOÑA ROCÍO RUIZ GUTIÉRREZ.
DON GIUSEPPE VIRZI.
DON ERICK YANNICK ZUCCONI RUIZ.
DOÑA TANIA MÓNICA ZUCCONI RUIZ.

Siendo el motivo de su tramitación el no encontrarse acreditado que los interesados cumplan la obligación establecida al artículo 54 del RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, de tener fijada su residencia en el domicilio indicado.

En consecuencia, y en aplicación de lo establecido al artículo 72 del RD 1690/1986, de 11 de julio y no habiendo podido efectuar notificación personal al desconocer el domicilio del interesado, es por lo que mediante el presente anuncio se notifica la incoación del citado expediente, concediendo al interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOC, a fin de que pueda comparecer en el mismo y efectuar cuantas alegaciones considere oportunas, aportando igualmente si lo desea cuantas pruebas o documentos considere necesarios en defensa de sus derechos e intereses.

El expediente con toda su documentación puede ser consultado en el Servicio de Estadística de los Herreros municipales sitas en la c/ Boulevard L. Demetrio Herrero nº 4, de Lunes a Viernes en horario de 9 a 14 horas.

Torrelavega, 15 de enero de 2007.—La alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante.
07/615

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Notificación de cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimiento, en Pintor Escudero Espronceda, 5.

La Alcaldía Presidencia con fecha 30 de noviembre de 2006, dictó Resolución, sobre concesión de licencia de apertura, por cambio de titularidad, a un establecimiento sito en la calle Pintor Escudero Espronceda, 5, denominada «Cervecería Marina» cuya licencia anterior figuraba a nombre de don Francisco Javier Arroyo Barrio, concediendo licencia a favor de doña María Jesús Pelayo Zornoza, con efectos al 29 de noviembre de 2006.

No habiéndose podido practicar la notificación del referido cambio de titularidad mediante correo certificado a don Francisco Javier Arroyo Barrio, en virtud de lo establecido en los artículos 59.4 y 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se notifica a citada entidad como interesada en el expediente.

Lo que se le comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Torrelavega, 11 de enero de 2007.—La alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante.
07/768

AYUNTAMIENTO DE UDÍAS

Información pública de solicitud de licencia para la instalación de depósito enterrado de propano, en barrio de La Hayuela.

Don Ángel Raposo, en nombre de «Costa Occidental Gestión, S.L.», solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de instalación de un depósito de propano enterrado ubicado en el barrio La Hayuela, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el BOC.

Udías, 3 de enero de 2007.—El alcalde, Fernando Fernández Sampedro.
07/291

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

8.2 OTROS ANUNCIOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Notificación de sentencia en recurso número 562/05

Don Luis Gabriel Cabria García, secretario de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,

Doy fe y testimonio: Que en el recurso contencioso-administrativo seguido en esta Sala con el número 562/05 se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 651/06

Ilustrísima señora presidenta: Doña María Teresa Marijuán Arias.

Ilustrísimos señores magistrados: Doña Clara Penín Alegre y don Rafael Losada Armadá.

En la ciudad de Santander, a 7 de noviembre de 2006.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 562/2005, interpuesto por Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI-CSIF, representada por la procuradora doña Marta Mesones Mesones y defendida por el letrado don Luis M. Sanz Capa, contra el Gobierno de Cantabria, representado y defendido por el letrado de sus servicios jurídicos y como codemandada Comisiones Obreras de Cantabria, representada por la procuradora doña Begoña Peña Revilla y asistida por el letrado don Luis Cordobilla Malero. La cuantía del recurso es indeterminada.

Es ponente el ilustrísimo señor magistrado don Rafael Losada Armadá, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso se interpuso el día 28 de septiembre de 2005 contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada contra la Orden de 29 de noviembre de 2004 que aprueba y regula la convocatoria de ayudas a la inversión en adecuación de estructuras formativas publicada en el BOC de 2 de diciembre de 2004.

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se estime el presente recurso contencioso-administrativo y se declare no ajustada a derecho la Orden de 29 de noviembre de 2004 de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo

Tecnológico por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas a la inversión en adecuación de estructuras formativas y se declare su nulidad.

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita la desestimación del recurso interpuesto y la parte codemandada la inadmisibilidad por extemporaneidad en su interposición o la desestimación del recurso.

CUARTO.- No recibió se prueba a recurso ni se formularon conclusiones escritas, pero la parte demandante contestó por escrito a la causa de inadmisibilidad alegada por la parte codemandada.

QUINTO.- Se señala fecha para votación y fallo el día 5 de octubre de 2006 en que, efectivamente, se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna a través del presente recurso la Orden de 29 de noviembre de 2004 de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas a la inversión en adecuación de estructuras formativas.

SEGUNDO.- Alega la parte recurrente en primer lugar que se han cometido graves irregularidades procedimentales durante el proceso de elaboración de la Orden recurrida como sucede con la inexistencia del plan estratégico en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, lo que supone una violación de las previsiones de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como de las siguientes actuaciones preceptivas en la elaboración de la Orden, que contiene el artículo 121.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de Cantabria, como la orden de inicio del procedimiento, los estudios e informes que garanticen la legalidad y oportunidad de la orden, así como la remisión de dicho proyecto de orden al secretario general de la Consejería para la emisión del preceptivo informe, todo lo cual revela que la Administración ha prescindido total y absolutamente de trámites esenciales que deben determinar la nulidad de pleno derecho por infracción del artículo 62.1.e) de la LRJAP y PAC.

Olvida la actora que nos encontramos ante un acto administrativo de los regulados en el artículo 122.3 de la Ley 6/2002 por lo que no resulta necesario el cumplimiento de dichos requisitos previstos en el artículo 121 de la citada ley referidos a la elaboración de las disposiciones generales, prueba de lo cual ha sido la admisión del recurso de alzada, pues de tratarse de una disposición general la orden recurrida, su impugnación jurisdiccional hubiera sido directa a tenor de lo establecido en el artículo 46.1 LJCA sin requerir la finalización de la vía administrativa previa como en este caso ha sucedido.

TERCERO.- La inexistencia de un plan estratégico en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, así como la de los costes previsibles y las fuentes de financiación que como principios generales prevé el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se encuentran integrados, si no totalmente en la propia orden recurrida, sí en la Ley 3/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2004 en la que consta la concreta partida presupuestaria a la que se remite la propia orden recurrida denominada «modernización de estructuras formativas» por importe de 300.000 euros, con el objetivo de subvencionar obras a los centros de formación de la Comunidad Autónoma que cola-

boren en la política formativa ocupacional y continua de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, debiendo tenerse en cuenta además que la exigencia contenida en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones resulta de aplicación con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2004, pues en virtud de la disposición final tercera párrafo 2 de la Ley 38/2003, ésta entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE el día 18 de noviembre, lo cual pone de manifiesto que no haya una total transposición de sus principios a la Ley de Presupuestos de Cantabria que es en la que se basa la presente Orden.

CUARTO.- Respecto a la también alegada vulneración del principio constitucional de igualdad dada la ausencia total de motivación o simple justificación de la configuración de las bases de la convocatoria dado que la única argumentación genérica es la de la lógica de favorecer la renovación de las instalaciones formativas a quien lleva más tiempo de servicio - 10 años - conjuntamente con la determinación de un número de alumnos - 400/año- computados durante los dos últimos años, que da como resultado que sólo existan tres organizaciones que cumplan ambos requisitos, tampoco puede ser acogida pues la dualidad expuesta no resulta irrazonable ni subjetiva pues, como argumenta la propia Administración demandada «no toda diferenciación de régimen jurídico es discriminatoria sino que para que eso se de es necesario que no exista una justificación objetiva y razonable debiendo aplicarse la falta de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida, debiendo valorarse si existe una relación razonable entre los medios empleados y los fines perseguidos (STC 22/1981, de 2 de julio)».

Como en este caso la propia finalidad de la Orden impugnada es la de subvencionar obras de adecuación de infraestructuras y modernización de aquellos centros que colaboren en la política formativa ocupacional y continua de la Consejería de Industria, resulta razonable la limitación de centros que las bases articulan en función de la antigüedad y del número de alumnos que reciben.

QUINTO.- Las contradicciones que la demanda resalta con relación a los artículos 7.1, 11.3 y 4 de las bases, al partir de la premisa de que la actuación subvencionable ha de estar finalizada en el momento de la convocatoria, no se ajustan a la realidad de las bases que no exigen tal requisito pues resulta obvio que es posible la subvención de obras realizadas dentro de un plazo pero correspondientes a un proyecto más amplio con un plazo de ejecución más amplio y también que puedan ser obras determinadas con un presupuesto pero el pago a realizar sea inferior a la cuantía concedida, lo cual despeja cualquier sospecha imposible de las mismas.

Sobre las competencias del órgano instructor a la vista del artículo 7.3 de las bases que contemplan la posibilidad de análisis y valoración por la unidad correspondiente de la Dirección General de Trabajo lo cual constituiría un exceso de las facultades previstas en el artículo 24.3.b) de la LGS, resulta de todo punto irrelevante pues es evidente que la evaluación o valoración final corresponde al órgano colegiado o comisión de valoración del arto 8 de la mencionada Orden.

SEXTO.- Por último, con relación a la alegación referente al informe de la intervención delegada, obrante al folio 24 del expediente administrativo, que dice que en el artículo 9 de la orden sobre los criterios de valoración y en aplicación de los artículos 58.2.e) de la Ley 3/2003 de Presupuestos Generales de Cantabria para el 2004 debe constar el sistema de ponderación de dichos criterios, ha de admitirse que la Orden impugnada no lo ha reflejado debidamente y prueba de ello lo es que la intervención delegada haya puesto reparos y pedido la rectificación que manifiesta al folio 24 del expediente administrativo.

El artículo 58.2 de la Ley 3/2003 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2004 establece:

«Previamente a la adopción de los acuerdos de concesión, deberán establecerse, en caso de no existir, las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas, que serán sometidas a informe de los servicios jurídicos de cada Consejería y de la Intervención Delegada, y publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria», y deberán fijar, como mínimo:

a) Definición del objeto, condiciones y finalidad de la subvención o ayuda.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para obtener la subvención o ayuda y forma de acreditar los mismos.

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras, cuando se prevea el recurrir a este instrumento de gestión.

d) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, o de la entidad colaboradora en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención o ayuda y de la aplicación de los fondos percibidos.

e) Criterios que han de regir la concesión de la subvención o ayuda y, en su caso, el sistema de ponderación de los mismos, así como la composición del órgano colegiado, encargado de la instrucción y propuesta de la resolución, cuando haya de realizarse por concurso.

f) Crédito presupuestario al cual se imputa la subvención o ayuda.

g) Plazo de presentación de peticiones, y documentación que debe acompañarse a las mismas, así como plazo de resolución del procedimiento.

h) En el supuesto de que se considere la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la cuantía concedida, forma y garantías que, si procede, deben aportar los beneficiarios. No se podrá adelantar al beneficiario más de un 50 por ciento de la subvención sin garantías, salvo las inferiores a cuatro mil quinientos euros. No se producirán nuevos abonos sin haber sido justificados previamente los pagos anteriores.

i) Obligación de los beneficiarios de facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros Organos competentes.

La Administración regional admite que los criterios de valoración del artículo 9 de la Orden no están ponderados pero trata de disculpar dicha omisión al decir que no son taxativamente exigibles y que al venir establecidos dichos criterios con arreglo a determinados parámetros como el volumen de la inversión, las necesidades de formación y orientación laboral de la comarca afectada y el efecto dinamizador, no parece relevante en este concreto supuesto dicha omisión que se considera cubierta por unos parámetros suficientemente explícitos con relación a la materia de que se trata.

SÉPTIMO.- No obstante, esta sala discrepa de tales consideraciones pues con remisión a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid, de 11 de noviembre de 2005, que dice «con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que si bien las subvenciones pueden ser discrecionales previamente al acto de su otorgamiento, una vez establecidas vinculan a la Administración convocante, que queda sujeta a los criterios de preferencia para su otorgamiento establecidos en las bases», la falta de un sistema de ponderación de los criterios de concesión de las subvenciones ofertadas resulta definitivo en cuanto a la consideración de su ilegalidad.

Menciona dicha sentencia la del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2004, la cual expresa:

...«tal y como ha reiterado la Jurisprudencia del TS y del T. Constitucional (SSTS Sala 3ª de 3-3-1993, de 07-7-1995, y de 21-9-1995, y SST Const. 25/1989 de 3-2 y 39/1989 de 16-2), si bien el establecimiento de la subven-

ción se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, en cambio su otorgamiento y reglamento concreto queda sujeto a las reglas y bases establecidas en la normativa que la regula. Es decir, que habremos de estar a las bases reguladoras de la correspondiente subvención para determinar los márgenes de apreciación que la Administración haya podido reservarse en orden al otorgamiento o denegación de la subvención, pues lo contrario resultaría arbitrario y atentatorio al principio de seguridad jurídica. De modo que, en definitiva, establecida la subvención será su regulación concreta la que determinará el margen de discrecionalidad con que cuenta la Administración en su otorgamiento o denegación.»

«Precisamente por ello manifiesta la STS, 3ª, de 5-10-1998 que «es doctrina de esta Sala que el establecimiento de las subvenciones puede ser discrecional para la Administración pero una vez reguladas por la correspondiente norma y anunciadas, termina la discrecionalidad y comienza la regla y el reparto concreto que escapa del puro voluntarismo de la Administración».

Y la del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso antes citada, en sentencia de 13 de octubre de 2004 EDJ 2004/159900 expresa que:

«en materia de subvenciones, cual es el supuesto de autos, esta Sala del Tribunal Supremo, tiene reiteradamente declarado, entre otras en sentencias de 19 de enero de 1991, 5 de marzo de 1993, 28 de julio de 1997, 3 de noviembre de 1998 y 25 de noviembre de 2003, a) que la Administración, puede o no crearlas, pero una vez creadas y convocadas ha de concederlos en los términos anunciados; b) que quienes soliciten la subvención y reúnan las condiciones de la convocatoria de la subvención, tienen derecho a obtenerla en las condiciones establecidas; y c) que la obligación de la Administración que crea y convoca la subvención y el derecho de que quienes la soliciten, estén delimitadas por la cuantía fijada en la convocatoria o en los presupuestos a que la misma se remite.»

Como en el presente caso resulta palmario que el artículo 58.2 de la Ley 3/2003 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2004 establece el preceptivo establecimiento de un sistema de ponderación de los criterios que se establezcan para concesión de las subvenciones que desarrolla la Orden recurrida que ésta no ha llegado a configurar, es por lo que su falta genera riesgo de arbitrariedad y una inseguridad jurídica que, finalmente, conduce a la estimación del recurso contencioso administrativo y que se declare no ajustada a derecho la Orden de 29 de noviembre de 2004 de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas a la inversión en adecuación de estructuras formativas con la consiguiente declaración de nulidad.

OCTAVO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de la parte actora al pago de las costas al no concurrir temeridad o mala fe procesales en la defensa de sus pretensiones.

EN NOMBRE DE SM EL REY

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI-CSIF contra la Orden de 29 de noviembre de 2004 que aprueba y regula la convocatoria de ayudas a la inversión en adecuación de estructuras formativas publicada en el BOC de 2 de diciembre de 2004 de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos su nulidad, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta resolución en el libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Concuerda bien y fielmente con su original a que me remito.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido el presente, en Santander, 14 de diciembre de 2006.—Firma ilegible.

07/770

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Sala de lo Social

Notificación de sentencia en recurso de suplicación número 1.084/06.

Secretaria
Señora Colvée Benlloch.

Presidente
Ilustrísimo señor don Rubén López-Tamés Iglesias.

Magistrados
Ilustrísima señora doña Mercedes Sancha Saiz.
Ilustrísimo señor don Jesús M^a Martín Morillo.

En nombre de su Majestad el Rey, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, compuesta por los ilustrísimos señores citados al margen, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En Santander, a 26 de diciembre de 2006.

En el recurso de suplicación interpuesto por doña Josefa Herrería del Río contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Uno de Santander, ha sido ponente la Ilustrísima señora doña Mercedes Sancha Saiz, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en autos se presentó demanda por doña Josefa Herrería del Río, sobre Seguridad Social, siendo demandados el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 13 de octubre de 2006, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.- Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- La demandante, doña Josefa Herrería del Río, nacida el 18 de marzo de 1955, afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con el nº 39/0033440806, ha venido prestando servicios profesionales para la empresa «Blanco Abascal, S.A.» dedicada a la fabricación de conservas de pescado.

2º.- En fecha 25 de noviembre de 2005 la demandante inició un período de incapacidad temporal por contingencia de enfermedad común con el diagnóstico de insuficiencia venosa.

3º.- La demandante fue remitida para estudio al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Marqués de Valdecilla, donde se le instauró tratamiento médico conservador.

4º.- Por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a petición de la Inspección Médica del Servicio Cántabro de Salud, se

emitió informe de fecha 23 de junio de 2005 con el contenido siguiente:

Paciente de 49 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II en tratamiento con dieta, obesidad mórbida amidalectomía.

Acude a consulta de cardiovascular por presentar claudicación intermitente a 50-100 metros con pulsos presentes en ambas extremidades a nivel femoral poplíteo y pedios. Edema importante bilateral de etiología venosa y pulso expansivo abdominal. Ante estos hallazgos se instaura tratamiento médico conservador para la claudicación con Pentoxicilina, antiagregantes y se recomienda caminar diariamente y se realiza una Ecografía Abdominal con resultado normal, descartándose la presencia de aneurismas.

La paciente deberá seguir controles rutinarios en consulta de cardiovascular.

Esta perfectamente capacitada para realizar su actividad laboral habitual y siguiendo las pautas recomendadas hay posibilidades de que mejore su cuadro de claudicación.

Dicho informe fue remitido por la Inspección Médica al médico de Atención Primaria a efectos de expedir alta médica, solicitando éste, ante las manifestaciones de la actora, su emisión por la Inspección Médica.

5º.- En fecha 21 de julio de 2005 por la Inspección Médica se expidió alta médica a la trabajadora con efectos al día 28 de julio de 2005.

6º.- La demandante solicitó al Servicio Cántabro de Salud, mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2005, la revocación del alta médica, la cual fue ratificada por el servicio de Inspección médica en 1 de agosto de 2005.

La demandante formuló el 25 de agosto de 2005 reclamación previa ante el Servicio Cántabro de Salud, siendo desestimada mediante resolución de fecha 7 de septiembre de 2005.

Tercero.- Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia de instancia desestima la pretensión formulada, de dejar sin efecto el alta médica por curación, emitida por la Inspección Médica el 21 de julio de 2005, y frente a la misma recurre en suplicación la reclamante.

Solicita, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión del cuarto hecho probado, adicionando el siguiente párrafo:

«Se instaura tratamiento médico, se recomienda a la paciente reposo y medidas posturales dado que no existe una solución quirúrgica para su problema pero evidentemente no está capacitada para llevar a cabo un trabajo que consista en una continua deambulación o bipedestación, ya que precisa de frecuentes períodos de reposos que imposibilitarán el desempeño de un trato de estas características. Precisaré controles posteriores en consulta de cirugía cardiovascular».

Se rechaza la adición pedida por venir fundada en un informe médico, fechado el 3 de noviembre de 2005 (folio 56 de los autos), carente de firma; en todo caso, no denota la situación de la actora en el momento del alta sino varios meses después y está en clara contradicción con otro informe del mismo Servicio y Médico, de 23 de junio de 2005, en el que consta que en aquella fecha estaba capacitada para trabajar.

Segundo.- Finalmente, con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, opone la infracción del artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social. En síntesis, argumenta la